

REFORMAS Y REFORMADORES: DOS  
INTENTOS DEL LIBERALISMO MEXICANO.  
UN ENSAYO COMPARATIVO  
**Lorenzo Meyer\***

**La perspectiva**

El eje de este ensayo es la identificación y análisis de algunos de los principales cambios políticos que se iniciaron en México o entraron en una nueva dinámica a partir de la crisis estructural de su economía durante los años ochenta del siglo xx. Para adecuarlo al resto de la obra, se aborda el tema con un enfoque distintivo, es decir, se examina ese pasado reciente poniendo como telón de fondo —punto de referencia y de comparación— uno de mayor antigüedad: el proceso que tuvo lugar poco más de un siglo y medio antes, cuando México apenas estrenaba independencia y se ponía en marcha el primer gran proyecto de modernización de las estructuras productivas y políticas de la nueva nación, la reforma liberal. Las bases teóricas del liberalismo original del siglo xix, si bien no idénticas a las del neoliberalismo de fines del siglo xx, sí comparten elementos sustantivos, aunque también diferencias, y estas últimas son más de carácter moral que de cualquier otra cosa.

Los primeros liberales disputaron el poder a los conservadores; querían tomarlo y ejercerlo para cambiarlo todo, desde el marco jurídico hasta las instituciones económicas, pasando por la estructura social y la cultura, para finalmente ensanchar los espacios de libertad y justicia de los nuevos mexicanos. En contraste, los neoliberales del siguiente siglo no tuvieron ya que luchar por hacerse del poder pues desde

el principio lo tuvieron, ya que resultaron ser los herederos de un viejo monopolio político enmarcado por un partido de Estado: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Justamente por haber recibido el mando por la vía de las instituciones autoritarias existentes, buscaron el cambio de una manera más limitada: su meta era modificar un esquema económico ya inviable, en realidad en bancarota, pero sin destruir el modelo político que, si bien igualmente obsoleto y también en bancarota por un déficit de legitimidad, era el que les había servido muy bien para alcanzar la cumbre y sostener su posición.

Al final de cada uno de los dos procesos, resulta que ninguno de los dos liberalismos logró exactamente lo que se habían propuesto. El original, después de la etapa heroica —la de la guerra civil y la lucha contra la Intervención Francesa—, se transformó en dictadura y se requirió una sangrienta revolución (1910-1920) para desalojarlo del poder y para crear una nueva institucionalidad. El segundo simplemente no pudo limitar el cambio que desató, y de la transformación económica, la sociedad exigió la política, por lo que la facción neoliberal del PRI terminó por perder el control de los hilos del poder el 2 de julio del año 2000. Unas elecciones relativamente libres y equitativas dieron el triunfo a una oposición también comprometida con el mercado, aunque democrática. Como sea, los dos liberalismos transformaron al país de manera irreversible.

### El gran proyecto

En 1973, el sistema económico mundial entró en un repentino proceso de inestabilidad y crisis que habría de durar casi dos decenios y marcar de manera indeleble el fin del siglo xx.<sup>1</sup> En ese año, la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) empezó a operar y estalló la guerra del Yom Kippur entre Israel y sus vecinos árabes. La OPEP usó su poder para castigar a los países industriales de Occidente e impuso

un fuerte aumento a los precios del petróleo, y fue así como llegó a su fin la “época dorada” (el adjetivo es de Eric Hobsbawm) del capitalismo de la posguerra y se inició otra: la del neoliberalismo, un cambio muy dinámico, en el que la extraordinaria apertura de los mercados nacionales llevó a que lo “dorado” se concentrara más que antes en unos pocos países y dentro de cada país, en unos pocos grupos.<sup>2</sup> En efecto, el neoliberalismo, al menos en su etapa inicial, se caracterizaría por una disminución de los programas sociales y del papel del Estado, el predominio del mercado en la asignación de los recursos, la globalización en el flujo de los capitales y la concentración de riqueza e ingresos entre y dentro de los estados nacionales. Al final del proceso, la Unión Soviética y su control sobre la Europa del Este se desplomaron de manera tan inesperada como pacífica y el “socialismo real” se convirtió en historia en un mundo donde, al final del siglo xx, Estados Unidos se quedó como la única gran potencia militar y el capitalismo como la única alternativa viable.

La naturaleza de los nuevos tiempos no fue reconocida de inmediato por todos, pero sus efectos se dejaron sentir sin tardanza. En México, el fin de la “época dorada” significó la conclusión del “desarrollo estabilizador” y, por supuesto, del “milagro económico mexicano”, aunque justamente entonces, el descubrimiento y explotación de grandes yacimientos petroleros en el sureste del país, combinado con un espectacular aumento en los precios internacionales de los hidrocarburos, permitió a la elite política posponer por unos años —hasta 1982— el momento del reconocimiento de que el país había entrado de lleno en las turbulencias de una gran crisis económica con consecuencias políticas de gran envergadura. En el crucial año 1982, el precio del barril de petróleo disminuyó rápidamente, y hacia fines del siguiente decenio se cotizó a casi un tercio del precio que había alcanzado en su mejor momento —el precio del combustible había pasado de poco más de un dólar por barril a tres dólares en 1973, para superar en algún momento de 1980 los cuaren-

ta dólares (se trató del árabe ligero para entrega inmediata). La enorme deuda externa mexicana contraída en medio de la euforia petrolera y de la supuesta "administración de la abundancia" —en 1970 su monto era de sólo seis mil millones de dólares, y doce años más tarde había aumentado más de catorce veces, ascendiendo a 86 mil millones de dólares: en el tercer mundo sólo la superaba, y no por mucho, la deuda brasileña—, estuvo a punto de no poder pagarse —el monto de su servicio en 1982 fue de 24 mil millones de dólares— y sólo un préstamo estadounidense de emergencia abrió al gobierno mexicano un espacio para la renegociación y lo salvó de la insolvencia. Hacia esa época, 60% de los ingresos provenientes de las exportaciones tuvieron que destinarse al pago del servicio de la deuda, dejando en un segundo plano las necesidades del crecimiento. Así, tras haber crecido 8% anual, la expansión de la economía mexicana simplemente se detuvo de golpe en 1982 para luego estancarse como resultado de una fuga masiva de capital y de falta de confianza de los inversionistas. En lo que restó del siglo, el crecimiento real fue casi nulo y sólo hasta el final se abrirían las posibilidades de una nueva etapa de desarrollo. Los años ochenta y noventa del siglo pasado terminarían por pasar a la historia mexicana como "décadas perdidas", donde el abrazo de la pobreza —que en 1981 abarcaba ya 48% de la población— se haría extensivo a una proporción mayor, más de la mitad del conjunto.<sup>3</sup> La falta de oportunidades y el desaliento sería el horizonte de una parte sustantiva de mexicanos.<sup>4</sup>

Fue necesario que corrieran los primeros cuatro años de la crisis económica —inflación, estancamiento o caída del Producto interno Bruto (PIB), aumento del endeudamiento externo, políticas fallidas de corto plazo, contención de la demanda interna, disminución del gasto público y aumento de las tensiones sociales— para que se aceptara, al más alto nivel político, que el país se encontraba inmerso en un proceso cuya solución no podía consistir simplemente en intentar recuperar el dinamismo perdido dentro del marco existente,

sino que requería de un proceso de transformación radical e irreversible de los principios y los objetivos básicos del modelo económico establecido a partir de las condiciones creadas en la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1985 ya era inviable la propuesta de continuar la industrialización de México con base en un mercado interno protegido por barreras arancelarias y administrativas, había que buscar otra vía y las alternativas no eran muchas, en realidad todas eran variantes de una sola: la neoliberal.

El cambio que se buscó en México a partir de 1986 no podía ser otro que el alentado por un contexto internacional dominado por Estados Unidos, Europa Occidental y Japón y por los organismos internacionales —el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial—, donde esos países llevaban la voz cantante. A partir de las victorias electorales de Margaret Thatcher (1979) y de Ronald Reagan (1981) en Gran Bretaña y Estados Unidos respectivamente, la orientación dominante en los países capitalistas centrales incluyó la privatización y la disminución radical del papel del Estado en el proceso económico, la disciplina fiscal y la apertura de los mercados nacionales a la inversión y a la competencia externas. En una palabra, se buscó transformar —reducirlo a la mínima expresión compatible con las circunstancias políticas— al "Estado de bienestar" surgido de la Segunda Guerra Mundial e iniciar un retorno a la economía liberal y al mercado global, justificando el cambio y sus costos por razones de eficiencia y justicia.

En el discurso de los reformadores mexicanos de los años ochenta —el presidente y su gabinete económico—, se introdujo el compromiso de acompañar el gran cambio de régimen económico —proceso que extrajo un enorme precio social de las clases populares y de toda una capa de la clase empresarial que no pudo reconvertirse para poder competir con éxito en el mercado global—, no con la transformación y liberalización del régimen político, sino apenas con una vaga y modesta promesa de "renovación moral de la sociedad"

—un supuesto combate a la corrupción pública endémica— más una cierta descentralización de la administración federal. De manera implícita se dejó saber que a la reforma radical y liberal de la economía no tenía por qué seguirle una transformación similar en política, que el régimen no estaba dispuesto a pagar ningún costo por su responsabilidad en la crisis y que el poder político seguiría concentrado en las instituciones de siempre, en beneficio de la vieja clase política y se ejercería de la manera tradicional. Se trató, por tanto, de un liberalismo económico y selectivo que pretendía aislar los efectos del cambio en las reglas económicas de los procesos políticos —una especie de *perestroika* pero sin *glaznost*, para utilizar dos términos popularizados durante la última etapa de la era soviética. Al final, la propia “renovación moral” no pasó del discurso, pues los intereses creados resultaron superiores a la voluntad política del presidente Miguel de la Madrid.<sup>5</sup> En economía todos los equilibrios se alteraron, pero en política se pretendió que todos se mantuvieran igual o casi, lo cual, a la larga, resultaría una misión imposible.

En la administración presidida por Carlos Salinas (1988-1994), el régimen político tradicional se reafirmó (aunque el discurso abusó del término “política moderna”) en tanto que la transformación económica se ahondó, al punto que México no sólo derrumbó su vieja barrera proteccionista sino que de plano abandonó lo que quedaba del antiguo nacionalismo revolucionario —ése cuya esencia era mantener distancia e independencia relativa frente a Estados Unidos<sup>6</sup>— y se lanzó de lleno a la empresa de negociar la formación de un Mercado de Libre Comercio de América del Norte, no obstante la evidente disparidad con sus dos posibles socios: Canadá y Estados Unidos, que ya acababan de firmar un acuerdo de libre comercio entre ellos. Fue entonces cuando los efectos políticos no deseados por los líderes del liberalismo económico se empezaron a acumular. Pese a los muchos obstáculos que puso una estructura autoritaria y de partido de Estado y como efecto de la dislocación de la economía, se

consolidó una oposición partidaria real, tanto de derecha como de izquierda, que tuvo la fuerza para apoyar su exigencia de una transición a la democracia política. Finalmente, en medio de conflictos y acciones contradictorias y tras vencer una serie de resistencias, el 2 de julio de 2000, y por la vía electoral, el partido que desde su creación en marzo de 1929 había dominado la vida política mexicana —el PRI—, fue obligado a dejar el poder y permitir, por fin, la posibilidad de acoplar el cambio económico, iniciado quince años antes, con el político.<sup>7</sup> Se trató, no sólo de la primera alternancia pacífica del partido en el poder sino que fue, también, el primer cambio pacífico de régimen político en la historia de México, uno donde el autoritarismo fue sustituido por la democracia.

Sin proponérselo, y en contra de sus deseos e intereses, las contradicciones entre cambio económico y permanencia política que intentaron los neoliberales autoritarios, terminaron por conducirlos a un callejón sin salida y, al final, se vieron obligados a entregar el poder a sus adversarios políticos que, por otra parte, no cuestionaron los cambios sustantivos del modelo económico iniciados tres lustros atrás. Quienes derrotaron al partido de Estado en 2000 tenían como plataforma continuar con la política económica de mercado y la globalización, pero con el apoyo de algo inédito: una legitimidad política surgida de las urnas y en un entorno de competencia política en condiciones de relativa equidad y libertad, una auténtica novedad en México. Se trató, así, de la derrota del liberalismo autoritario a manos de otro democrático. A este último se le presentaba el reto fundamental de todo liberalismo: combinar la libertad política formal con la justicia social, la equidad, pero ése ya es otro tema.

## La naturaleza de los liberalismos

El primer liberalismo mexicano, el del siglo xix, se propuso como tarea histórica un proyecto tan grande y revolucionario como generoso: clausurar de una vez por todas el México viejo, el colonial, por considerarlo un obstáculo a la modernización demandada por las nuevas elites surgidas de los no muy numerosos pero sí estratégicos, sectores medios. La meta de esos liberales llenos de energía, optimismo y confianza en el progreso en general y en su proyecto en particular, era llevar a cabo un cambio profundo y rápido —una revolución, en el sentido pleno del término— en lo económico, lo político y, sobre todo, en lo cultural. El segundo liberalismo, el de fines del siglo xx, no se propuso algo menor —clausurar el México que se había desarrollado a la sombra de la Revolución Mexicana— aunque desde el inicio no se mostró para nada generoso y tampoco desinteresado, como sí había sido el caso de su antecesor.

El régimen surgido de esa terrible guerra civil que fue la Revolución Mexicana (1910-1920), terminó por conformar y consolidar uno de los autoritarismos más estables y prolongados en el mundo del siglo xx. La base de ese régimen fue la incorporación de los campesinos y las clases trabajadoras a un partido corporativo y de Estado, sujeto a la voluntad de una presidencia muy poderosa pero donde la no-reelección fue la regla central, sobre todo a partir del asesinato de quien pretendió transgredirla en 1928: el general Álvaro Obregón. Ese partido se apoyó en un nacionalismo que con el paso del tiempo se hizo más de discurso que de realidades y, a partir de la crisis de 1982, se convirtió en un obstáculo para el nuevo proyecto globalizador y debió ser abandonado. Sin ese escudo protector del nacionalismo y de las políticas sociales del "Estado interventor", la imponente pero anquilosada estructura política antidemocrática construida alrededor de un partido de Estado —el Partido Nacional Revolucionario (1929), Partido de la Revolución Mexicana (1938), Partido

Revolucionario Institucional (1946)— perdió mucha de su legitimidad tradicional y dejó a la estructura de poder con un gran déficit en ese campo.<sup>8</sup>

Ambos liberalismos, el del siglo xix y el del xx, se justificaron ante la sociedad mexicana y ante el mundo como los motores políticos e intelectuales de un esfuerzo necesario e insustituible para hacer entrar al país —forzarlo, en realidad— a la modernidad material y cultural, definida ésta en cada época por los paradigmas desarrollados en los países centrales del sistema capitalista mundial. A final de cuentas, el proyecto del primer liberalismo se materializó en una innegable e impresionante transformación económica —la creación de una red ferroviaria y de una industria petrolera más los cambios en las actividades mineras, financieras, textiles y en la agricultura de exportación—, pero quedó políticamente enmarcado por una realidad muy contraria a sus postulados de legalidad y democracia originales: la larga dictadura política de Porfirio Díaz. El final del liberalismo decimonónico fue simplemente catastrófico: la revolución de 1910 y un nuevo régimen que, al identificar dictadura con liberalismo económico, erigió un marco político y cultural donde, pese a mantener intocada la figura heroica de Juárez, el liberalismo mismo quedó un tanto deslegitimado por su identificación con una realidad oligárquica y contraria a los intereses de las clases populares y de la nación en su conjunto, que fueron las bases del nuevo régimen.

El proyecto de los segundos liberales, los de fines del siglo xx, se echó a andar 75 años después de la destrucción del régimen porfirista, pero se hizo con el discurso de un "liberalismo social" y desde la perspectiva y con los mecanismos del autoritarismo posrevolucionario, es decir, una presidencia fuerte y un partido de Estado. Sin embargo, y pese al enorme y consciente esfuerzo desplegado por la presidencia de Carlos Salinas para sacar adelante la reforma económica sin modificar la esencia del régimen político, las fuerzas sociales desatadas por el brusco ingreso de México al sistema

de la globalización, más las reverberaciones que en el país tuvo la llamada "tercera ola" de la democratización mundial, forzaron a los nuevos liberales a entrar, aunque poco a poco y sin voluntad, al juego de la apertura política real por la vía de sucesivas reformas electorales.<sup>9</sup> Como resultado de ese proceso y justo al finalizar el siglo y llevarse a cabo elecciones presidenciales, el control de las principales variables políticas se escapó definitivamente de las manos de los liberales (económicos) autoritarios (políticos) y desembocó en unas elecciones cuyo resultado fue un triunfo irreversible de la oposición democrática de centro derecha. Así pues, al iniciarse la segunda mitad del año 2000, México experimentó algo sin precedentes en su historia: un cambio no catastrófico, por la vía legal, de régimen político. Ya no se repitió la experiencia de una gran convulsión política y social en que se había hundido su contraparte al inicio del siglo. Se trató, la del año 2000, de una "revolución de terciopelo", aunque en un entorno de crecientes contradicciones sociales que amenazaban con poner pronto a prueba la eficacia de la nueva democracia.

### **Los orígenes: el primer liberalismo**

El primer liberalismo mexicano, el decimonónico, tuvo su origen menos en los procesos internos propios de la sociedad mexicana y más en las ideas y los sucesos producto del liberalismo europeo y estadounidense de los siglos XVIII y XIX. En 1808, la crisis de la monarquía española tuvo un desenlace dramático como resultado de la invasión napoleónica a la Península Ibérica y de la consecuente Guerra de Liberación Española. La combinación de esos factores llevó a la redacción y puesta en marcha, en 1812, de la constitución liberal de Cádiz, que tuvo una vida corta pero una influencia larga y decisiva en las colonias americanas del monarca español.

Con la Independencia Mexicana —iniciada en 1810 por criollos radicales y que se tornó en una inesperada y feroz guerra social y racial, y consumada en 1821 como un acuerdo entre españoles y criollos conservadores por una parte y mestizos radicales por la otra— las ideas liberales, y a contrapelo de la estructura social y la voluntad de la Iglesia, se diseminaron entre las clases medias ilustradas mexicanas, que las popularizaron y sistematizaron en la Constitución de 1824.<sup>10</sup> Fue así como el primer liberalismo pasó de la teoría a la práctica. Sin embargo, el peso de la tradición absolutista y colonial, dio como resultado una rápida, profunda y, quizá, inevitable división entre la nueva elite gobernante que se fue ahondando conforme transcurrió el tiempo, la cual tuvo como consecuencia que las elecciones fueran sustituidas por la acción directa como el medio eficaz de alcanzar el poder y llegó a su punto culminante a partir del desastre que dejó la guerra de 1947 con Estados Unidos.

La división original entre monarquistas y republicanos, entre masones yorkinos radicales y masones escoceses conservadores, entre anticlericales y la Iglesia católica o entre las tendencias regionalistas (federalistas) y centralistas, culminó al iniciarse la segunda mitad del siglo en una dura y prolongada guerra civil entre dos bandos definidos, en términos muy generales, como liberales y conservadores. Esa guerra civil se combinó, más tarde, en los años sesenta, con una guerra de liberación frente a un oportunista invasor francés que apoyó el establecimiento de una monarquía presidida por el archiduque austriaco, Maximiliano de Habsburgo.

### **Los orígenes: el segundo liberalismo**

Un siglo y un par de decenios más tarde, el neoliberalismo también se inició como resultado de una crisis y de una ruptura dentro de la cúpula dirigente del PRI, justificada con razones de teoría económica —la alta tecnocracia/gubernamental

culpó a los políticos tradicionales de populistas, estatistas e ineptos y de provocar las crisis económicas que pusieron en peligro al régimen— y filosóficas —el paternalismo estatal llevaba al clientelismo y a la corrupción e impedía al individuo desplegar toda su energía y creatividad—. A diferencia de lo ocurrido el siglo anterior, la tensión que generó ese choque de intereses e ideología en la cúspide del sistema de poder y dominación, no destruyó la estabilidad y, al final de cuentas, aunque el cambio se produjo en medio de una atmósfera de crispación y recriminación, y fue mucho más lejos de lo deseado por quienes lo iniciaron, no desembocó en una solución catastrófica como la del siglo XIX y tan característica de casi todos los cambios de régimen en México.

Alrededor de 1987, la cúpula dirigente del sistema político mexicano, tras una sorda pero feroz lucha interna, inició una transformación radical e impulsada desde arriba, para sustituir el modelo económico vigente y resolver de raíz la crisis del sistema productivo y renovar las bases materiales y políticas de su poder. El viejo modelo había impulsado la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones gracias a una coyuntura muy favorable: la centralización del poder político, la bonanza exportadora provocada por la Segunda Guerra Mundial y la aceleración de la urbanización. La decisión, tomada en los cuarenta, de crear una base industrial teniendo como sustento un mercado interno relativamente pobre pero protegido por una sólida barrera tanto de tarifas arancelarias como de disposiciones administrativas, habría de tener un alto costo social que se justificó de dos formas. En primer lugar con las doctrinas elaboradas en los años cincuenta por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y en segundo lugar con una reinterpretación del nacionalismo revolucionario. En efecto, se argumentó que para lograr la independencia frente a Estados Unidos, México tenía que crear una planta industrial propia y dejar de depender de la mera exportación de materias primas.<sup>11</sup> Sin embargo, la verdadera fuerza y legitimidad de la nueva política económica provino menos de la

teoría del desarrollo protegido y del nacionalismo y más de sus resultados concretos: una nueva burguesía privada y pública y sindicatos fuertes que agruparon a una "aristocracia obrera".<sup>12</sup> Entre 1951 y 1980, el PIB por habitante en México tuvo un crecimiento anual promedio de 3.3%.<sup>13</sup> Ese buen desempeño contrastó muy favorablemente con el periodo anterior —y con el posterior— y se dio en el marco de una notable estabilidad tanto de los precios como del proceso político.<sup>14</sup>

Como ya se señaló, la caída de los precios de la principal exportación mexicana —el petróleo— a inicios de los años ochenta, se dio en el contexto de una economía petrolizada, con un déficit externo estructural y una deuda externa alta y creciente. Esa combinación hizo inviable un esquema económico en el que la intervención administrativa y económica estatal era el elemento que marcaba el paso al resto de los agentes productivos privados.<sup>15</sup> El cambio de la naturaleza de la política económica a partir de 1985-1986 —un cambio rápido, en una dirección casi opuesta a la mantenida a lo largo de cuarenta años— tuvo, entre sus efectos, el acelerar un impulso ya evidente desde 1968 de fuerzas contrarias al modelo político autoritario.<sup>16</sup> Por decenios, la clase gobernante había podido resistir con éxito las presiones para democratizar las reglas que determinaban el acceso y ejercicio del poder, pero las reverberaciones de la gran crisis económica y social desestabilizaron un equilibrio político que ya experimentaba un déficit de legitimidad. El proceso político mexicano se vio lanzado entonces, y a pesar de la resistencia, en dirección del cambio por la única vía posible: la marcada por la "tercera ola democrática" que para entonces ya había tocado a América Latina.<sup>17</sup>

## El liberalismo original en acción

Queda claro que el punto de partida de los liberalismos mexicanos no es, como en el caso de los países centrales, un resultado natural de un proceso de desarrollo político de largo plazo, sino una crisis. En el primer caso, esa crisis la ocasionó la desintegración del imperio español en América y la agudizó el desastre provocado por la invasión estadounidense. La derrota absoluta y sin atenuantes del ejército —la principal institución política nacional— en 1847, llevó a la pérdida de un territorio que si bien aún estaba poco poblado, ya era parte del imaginario colectivo o, al menos, de su parte políticamente más activa: de sus elites. En realidad, la viabilidad misma de la comunidad imaginada por los mexicanos capaces de hacerlo, para usar un concepto ya consagrado por Benedict Anderson,<sup>18</sup> se puso en duda. En el norte, por ejemplo, se jugó con la idea de crear la República de la Sierra Madre y en el sur la elite criolla yucateca buscó, con empeño pero sin éxito, acogerse a la protección de Estados Unidos o de alguna potencia europea como la mejor forma para adquirir los recursos necesarios para enfrentar la terrible guerra contra una parte de la comunidad maya —la llamada Guerra de Castas—, que acababa de estallar en la península.<sup>19</sup>

La derrota frente a Estados Unidos significó para México, en palabras de Josefina Vázquez, “la renuncia al brillante destino que parecía haberle prometido su gran territorio y riquezas como Reino de la Nueva España”.<sup>20</sup> La lucha entre el centro y las regiones, que venía de atrás y tenía su origen en la reforma borbónica, se intensificó al punto de transformarse en el tema político central, en el que se mezcló el conflicto entre los conservadores y los liberales —que a su vez estaban divididos en moderados y radicales— y de estos últimos con la Iglesia católica.

De las cenizas de la derrota militar y del hundimiento irreversible de México en la ancha periferia del sistema mundial, resurgió, por el lado conservador, el proyecto de inten-

tar nuevamente una solución monárquica diseñada. Ese proyecto fue planeando y encabezado por Lucas Alamán y apoyado por el inevitable general y caudillo don Antonio López de Santa Anna, como el instrumento idóneo para poner en marcha una monarquía mientras se encontraba en Europa un príncipe para afianzarla. Sin embargo, ese plan se vino por tierra por la inesperada muerte de Alamán —líder político e intelectual insustituible del conservadurismo mexicano— y el posterior triunfo militar de la rebelión liberal de Ayutla de 1854. El final del santanismo y de toda una etapa del desarrollo político de México, fue sellado con la aprobación de la constitución liberal y radical de 1857, a la que siguió la guerra civil definitiva entre liberales y conservadores, que en unión de la Iglesia católica, rechazaron no sólo el documento constitucional sino el modelo liberal en su conjunto e insistieron en la alternativa monárquica. Tras el fracaso militar y político del proyecto imperial encabezado por Maximiliano de Habsburgo con el apoyo de Francia —la creación de un Estado-cliente en la frontera con Estados Unidos era el punto de partida de un gran proyecto francés para Latinoamérica que, finalmente, se vino abajo— llegó el momento de la derrota definitiva de la alianza conservadora y monárquica y el inicio de una hegemonía política liberal y republicana que habría de prolongarse, transformada, hasta 1911.

En el verano de 1867 el liberalismo triunfante en el campo de batalla, encabezado por Benito Juárez, limpió el terreno político de los obstáculos que impedían iniciar el gran experimento, acariciado desde mucho tiempo atrás por los revolucionarios mexicanos: la modernización del país por la vía de las instituciones liberales. Sin embargo, con el correr del tiempo, la transformación económica adquirió prioridad sobre la política. Hacer de un México todavía muy teñido por su pasado colonial una democracia liberal, resultó una empresa muy difícil, por no decir que imposible. En ese México de finales del siglo XIX había muy pocos ciudadanos y un exceso de súbditos, especialmente en la sociedad rural, donde las identi-



dades corporativas le ganaban la partida al individualismo liberal.<sup>21</sup> Desde entonces, y hasta 1911, México vivió la hegemonía liberal bajo la presidencia de dos hombres fuertes: Benito Juárez y, a poco de la muerte de éste en 1872, el general Porfirio Díaz, quien se convirtió en la figura dominante en México desde 1876 hasta 1911.

En ese periodo, el país se transformó sustancialmente, al grado de dar forma a un incipiente mercado interno e iniciar su revolución industrial. Sin embargo, el sistema político se quedó estancado en la dictadura, de más de tres decenios, del presidente Díaz. El resultado fue un sistema oligárquico en el que el proceso electoral —siempre indirecto— fue controlado por las autoridades, y la representación política de las clases medias, de las mayorías campesinas y la minoría proletaria, simplemente no existió.<sup>22</sup> Cuando un notable miembro de la oligarquía porfirista, Justo Sierra, aconsejó recuperar el tiempo perdido y dar prioridad a la modernización política del país, ya fue, quizá, demasiado tarde.<sup>23</sup>

### El disparador del neoliberalismo

Avancemos ahora el reloj histórico mexicano tres cuartos de siglo, hasta toparnos con el inicio del nuevo liberalismo. En noviembre de 1982, y tras el fracaso del “neopopulismo” de Luis Echeverría primero y, acto seguido, de la “administración de la abundancia” de López Portillo, que no fue más que una petrolización justo en el momento en que bajaron los precios mundiales del combustible —la consecuencia fue una fuga masiva de reservas, devaluación, nacionalización de la banca comercial y, al final, una deuda externa de 92.4 mil millones de dólares, cuyo servicio de 12.2 mil millones de dólares anuales tuvo que suspenderse temporalmente—, el gobierno mexicano se vio obligado a aceptar las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) —en realidad por Estados Unidos, la fuerza dominante en el FMI—

para obtener un préstamo de emergencia de 3.7 mil millones de dólares, apoyo político para renegociar su deuda con la banca mundial y conseguir nuevos préstamos de largo plazo. La “carta de intenciones” suscrita entonces por el gobierno mexicano con el FMI, no fue otra cosa que la aceptación de los lineamientos generales de la “revolución neoliberal”: disminución de la intervención del Estado en la economía, desmantelamiento de las barreras arancelarias y libertad de movimiento del capital internacional.

En una primera etapa (1983-1985), el gobierno de Miguel de la Madrid intentó controlar la crisis pero sin decidirse a cuestionar la naturaleza misma de la estructura económica heredada y privilegiando la renegociación de los términos del servicio de la deuda, las medidas provisionales de austeridad presupuestal y la estabilización cambiaria. Sin embargo, ante la insuficiencia de esa estrategia, se inició una segunda fase. La acción gubernamental aceptó entonces de plano la inviabilidad de los supuestos tradicionales —los del “nacionalismo revolucionario”— y se propuso la adopción de la nueva ortodoxia ya dominante en los centros mundiales de las finanzas y el comercio. México ingresó entonces al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) —una medida que había sido rechazada explícitamente por el gobierno de López Portillo— y se empezaron a demoler las barreras arancelarias que protegían el 90% de la producción nacional. Al final del mandato de Miguel de la Madrid, únicamente el 20% de la producción mexicana permanecía relativamente protegida, el resto tenía ya que competir en las condiciones dictadas por el mercado mundial.<sup>24</sup>

Bajo el presidencialismo radical de Carlos Salinas (1988-1994), las reformas económicas se profundizaron. La protección a la producción nacional prácticamente desapareció y, en 1990, la banca nacionalizada ocho años antes se reprivatizó; un buen número de las empresas públicas o con participación estatal se entregaron al sector privado, de tal suerte que de las 1, 155 empresas que controlaba el gobierno en 1982,

al final del decenio sólo quedaban 280. Al concluir el siglo, únicamente la producción de petróleo y la generación de energía eléctrica sobrevivirían como campos productivos importantes dominados por la empresa pública, y no porque en el nuevo esquema la energía tuviera que seguir en manos del Estado, sino porque los remanentes del nacionalismo revolucionario habían logrado hacer políticamente prohibitiva su privatización.

En resumen, la crisis del modelo económico posrevolucionario fue el detonador de un cambio profundo y acelerado que se inició en la segunda mitad de los años ochenta y que terminó con la economía protegida de la posrevolución para dar paso a otra, dominada por la lógica del mercado mundial. La estructura social mexicana resintió el cambio; el crecimiento económico global se estancó por casi dos decenios, el sindicalismo perdió terreno ante la necesidad de la "flexibilidad laboral", una parte de la clase empresarial sucumbió ante la imposibilidad de competir y la marginación social se agudizó. En contraste, la industria exportadora, donde el capital externo era importante, prosperó y el ingreso se concentró.<sup>25</sup> Al concluir el siglo y el gobierno encabezado por Ernesto Zedillo —un economista completamente comprometido con el afianzamiento del nuevo modelo—, la economía mexicana parecía haber superado finalmente la etapa del reajuste —una especie de cirugía mayor sin anestesia— y empezaba a mostrar signos de crecimiento sustantivo: alrededor de 7% anual en el 2000, aunque al año siguiente y como resultado de una recesión en Estados Unidos, volvió a disminuir.

### El rechazo del pasado

En cada uno de los casos bajo examen, la crisis política y económica llevó a los reformadores a elaborar una visión negativa del antiguo régimen —"la autoridad antigua", como se decía en el siglo XIX—, según la cual instituciones centrales

de ese pasado fueron presentadas como el gran obstáculo a la modernización, la eficiencia, la justicia y la ética. Por tanto, parte sustantiva de lo heredado debía ser demolido para permitir el nacimiento de una etapa superior del desarrollo de la sociedad mexicana. El centro de la base teórica de los primeros liberales mexicanos era la simple y elegante teoría de la economía política (el "sistema natural de libertad") de Adam Smith (1723-1790) y el utilitarismo de Jeremías Bentham (1748-1832). Pero también formaban parte de su conjunto de ideas el liberalismo político de origen español, francés, inglés y estadounidense.<sup>26</sup>

Al iniciarse la Guerra de Reforma en 1858, Benito Juárez, el abogado y político oaxaqueño transformado en líder de los liberales —demócratas y republicanos— definió a sus enemigos, los conservadores —monárquicos— como quienes deseaban "ver de nuevo al país ensayando a volverse pupilo de 1821". Desde esta perspectiva, la guerra civil que se avecinaba fue calificada como una instancia más de la "antigua lucha entre la luz y las tinieblas".<sup>27</sup> Los liberales radicales buscaban no un compromiso con sus opositores sino el triunfo total por la vía de la destrucción del adversario, pues, según ellos, ésa era la única forma de arreglar cuentas con un pasado que era el gran obstáculo en el camino que México debía recorrer para llegar a la modernidad e introducir la idea del progreso como un elemento natural.

Para los ideólogos y líderes del primer liberalismo, el objetivo de su esfuerzo político y militar no era sólo prevalecer como la nueva clase dirigente, sino "reparar hoy los desaciertos de nuestros padres".<sup>28</sup> A sus ojos, el pasado prehispánico —idealizado por el patriotismo criollo al momento de la separación de España— ya no sólo carecía de valor, sino que una parte de su herencia, las comunidades indígenas, era un obstáculo rotundo a la modernidad.<sup>29</sup> Respecto de la herencia colonial —de las instituciones españolas—, esos liberales no objetaron a la religión católica como tal pero sí a su Iglesia —al papel económico, político y educativo de esa institu-

ción—, a la idea de mantener una religión oficial y, desde luego, a la organización gremial del Estado, con sus fueros y privilegios corporativos y antiindividualistas. Para esos liberales que no daban ni pedían cuartel, la existencia de clases “improductivas” —la Iglesia católica, el ejército ineficiente y depredador, los gremios y las comunidades indígenas— era la razón fundamental del retraso material y moral de México y de su fracaso frente al desafío externo.<sup>30</sup> El individualismo liberal —la organización de ciudadanos y productores responsables de su destino particular— era incompatible con la preservación de la organización corporativa colonial. De la misma forma y por la misma razón, no eran compatibles la democracia que se deseaba y la herencia secular de la monarquía absoluta de la que, afortunadamente, se había desprendido México en 1821.<sup>31</sup>

El sistema de pensamiento que inspiró a los nuevos liberales del siguiente siglo, fue otro igualmente claro, cuyas raíces morales, políticas y económicas eran las mismas del liberalismo original, aunque puestas al día por las escuelas de economía y ciencia política de las grandes universidades de Estados Unidos y Europa Occidental. Desde la perspectiva del neoliberalismo, la vitalidad y acierto de sus postulados y visión del mundo quedó comprobada de manera irrefutable y dramática por el espectacular fracaso de la Unión Soviética y del “socialismo real”.<sup>32</sup> En ambos liberalismos dominó la idea —la obsesión— de reducir al máximo la intervención y magnitud de la burocracia estatales —la “empleomanía” de que hablaban los primeros liberales— en favor de un trabajo realmente productivo, dominado por las duras reglas de la competencia del mercado —la libertad— y con el sector privado controlando el ritmo y naturaleza de la economía.<sup>33</sup>

La Revolución Mexicana, que se inició como un reclamo liberal en favor del Estado de derecho, terminó por ver con malos ojos a ciertos aspectos de ese liberalismo por algunas de sus consecuencias prácticas, en particular la des-

ventaja en que colocaba a las clases populares. Desde luego que el constituyente de 1917 no tuvo ninguna dificultad en incorporar las garantías individuales propias del liberalismo al documento fundamental y reafirmar la legitimidad de la democracia representativa, la división de poderes —aunque desde el principio le dio notable primacía al Ejecutivo—, el federalismo y el municipio libre. En este aspecto, y al menos en teoría, no hubo conflicto entre la Revolución y los principios liberales heredados, pero sí lo hubo cuando el constituyente decidió subordinar la propiedad privada al interés colectivo. Este último principio fue desarrollado en el artículo 27, mismo que más adelante permitió la reforma agraria, la expropiación de la industria petrolera y, con el paso del tiempo, la creación de un poderoso sector paraestatal: petróleo, electricidad, ferrocarriles, comunicaciones, banca de desarrollo, etcétera.<sup>34</sup> Ese marco legal sólo parcialmente liberal y, sobre todo, la práctica, permitieron concentrar un enorme poder en el gobierno en general y en la presidencia en particular, y también justificar la intervención directa del Estado en el proceso económico como una forma necesaria e insustituible de defender los intereses de las clases populares y el nacional frente a la codicia del gran capital internacional.

Hacia los años setenta, el aumento de la participación del sector público en la economía se presentó como el mejor indicador del cumplimiento del compromiso histórico del régimen con sus bases y, por tanto, de su legitimidad.<sup>35</sup> Si en 1910 el gasto total del gobierno representaba apenas 3% del PIB, en 1970 ya había llegado a 25% y en 1982 alcanzó su punto máximo: ¡46%!<sup>36</sup> Fue justamente entonces y como consecuencia que estalló la crisis de todo ese sistema posrevolucionario de “economía mixta” y partido de Estado.

A partir de la administración de Miguel de la Madrid y de la adhesión de México al GATT en julio de 1986, se puso en marcha definitivamente el nuevo modelo económico, uno básicamente compatible con los rápidos procesos integradores del gran sistema global de mercado.<sup>37</sup> La justificación del cam-

bio y la necesidad de descargar la responsabilidad de la crisis en el pasado, llevó a que el discurso oficial, así como el de los representantes empresariales y un buen número de analistas y críticos, condenara el "populismo" de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, e incluso el de los anteriores, hasta llegar al de Lázaro Cárdenas (1934-1940), verdadero origen del Estado interventor en México. Desde luego la condena no fue total, puesto que la raíz política del grupo que tan duramente juzgaba al pasado estaba en ese mismo pasado! En cualquier caso, el futuro del país, se dijo entonces, iba a depender de la capacidad de los neoliberales de prevalecer sobre los populistas-nacionalistas en la pugna desatada dentro del propio círculo de la clase gobernante.<sup>38</sup>

Al estatismo del pasado se le cargó no sólo la responsabilidad de la crisis estructural, sino la de haber despilfarrado recursos enormes y haber estimulado el crecimiento de un sector paraestatal tan gigante como ineficiente y el de una planta industrial privada incapaz de exportar lo suficiente para compensar las divisas que consumía y enteramente dependiente del apoyo gubernamental para subsistir. Finalmente, todo ese arreglo malsano se envolvió en una enorme maraña de reglamentos, burocracia y decisiones discrecionales que dieron como resultado una corrupción institucionalizada y omnipresente.<sup>39</sup>

Desde la posición del partido oficial, el PRI, las elecciones de 1988 se presentaron como una lucha entre los modernizadores —los neoliberales—, encabezados por Carlos Salinas de Gortari, y una oposición "populista" —el Frente Democrático Nacional—, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, un ex priísta al que se definió como nostálgico del pasado y que se negaba a cambiar.<sup>40</sup> El viejo Partido Acción Nacional (PAN), por su parte, dejó de ser una mera organización testimonial para transformarse en un verdadero partido que, si bien aún era minoritario, ya tenía voluntad de poder, sobre todo después de recibir una fuerte carga de empresarios descontentos que renegaron de su viejo apoyo al PRI o su

indiferencia a la acción política directa, para ingresar al campo de la oposición enérgica.<sup>41</sup> Ése fue el caso, entre otros, del agricultor sinaloense Manuel Clouthier, que lograría alzarse con la candidatura del PAN para forzar la apertura del sistema político a la democracia como la única forma de hacer efectivos los mecanismos de control sobre una presidencia que hasta ese momento era irresistible e irresponsable. Evidentemente, Clouthier y los otros empresarios transformados en opositores, exigieron abandonar rápido y de manera definitiva el estatismo y sustituirlo por una economía predominantemente de mercado.<sup>42</sup> Tras una campaña electoral sin precedente desde 1952 por lo enconado de la lucha, el PRI de nuevo se adjudicó el triunfo —el décimoprimeroininterrumpido desde 1929— pero apenas con poco más de 50% de los votos, lo que contrastó notablemente con las cifras del pasado, donde el PRI rutinariamente recibía entre el 70% y 90% de los votos e incluso más, lo que permitía a ese partido decir que él representaba no a una parte sino al todo social. El neoliberalismo duro llegó entonces al poder encabezado por Carlos Salinas, pero su arribo quedó marcado por la fuerte sombra de un gran fraude electoral de Estado.<sup>43</sup>

Una vez en la presidencia, pero enfrentado a una oposición sistemática e irreductible desde el centro-izquierda —encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y el recién formado Partido de la Revolución Democrática (PRD)— y apoyada condicionalmente por un PAN que apenas si se reponía del shock de haber sido rebasado por la izquierda como oposición y pasar de segunda a tercera fuerza política, el gobierno de Salinas desarrolló con gran rapidez y habilidad el concepto de "liberalismo social". La raíz de ese concepto clave del salinismo la había plantado un pequeño grupo radical de los primeros liberales, en el que destacó la figura de Ponciano Arriaga, que entonces propuso dotar a los indígenas de los instrumentos mínimos —tierras, semillas y herramientas— para que pudieran enfrentar con éxito la competencia en el mercado.<sup>44</sup> El liberalismo social salinista anunció como objetivo

situarse en un punto intermedio entre el viejo “estatismo absorbente” y el “neoliberalismo posesivo”, para construir un equilibrio entre la sociedad y el Estado, la libertad y la igualdad, el individuo y la comunidad, los derechos sociales y las garantías individuales.<sup>45</sup>

En la práctica, el “liberalismo social” de Salinas resultó ser menos social de lo que prometió. Con los recursos de las privatizaciones —Teléfonos de México, la banca, las aerolíneas, etcétera—, el gobierno dio forma a un Programa de Solidaridad (Pronasol), cuyo objetivo, en teoría, era el auxilio directo pero temporal mientras los beneficios del mercado se materializaban para los grupos sociales más golpeados por la crisis y la transformación de la economía. Sin embargo, en la práctica, el ingreso y el poder económico se concentraron aún más que antes y la pobreza aumentó. Al final, Pronasol resultó más un programa destinado a recuperar el apoyo electoral para el partido de Estado, perdido en el 1988, que un esfuerzo por combatir a fondo los efectos de la pobreza estructural.<sup>46</sup> Una vez pasada la elección de 1994, el PRI volvió a tener su decimosegunda —y última— victoria consecutiva en el ámbito presidencial, desapareció el Pronasol envuelto en la mortaja del desprestigio. En el sexenio de Ernesto Zedillo, el liberalismo como política económica continuó y el problema social se definió como combate a una pobreza creciente (sobre todo después de la caída del PIB en 7% en 1995) pero con un instrumento menos costoso —Progresá— y centrado sólo en las familias en pobreza extrema.<sup>47</sup> De acuerdo con los cálculos de Julio Boltvinik, al concluir el siglo xx, la pobreza en México había aumentado al punto que 70% de su población caía dentro de algunos de los rangos con que se podía medir esa categoría.<sup>48</sup> Por otro lado, al final del sexenio de Zedillo, se empezó a dar un crecimiento significativo de la economía —superior al demográfico— pero enteramente ligado a los vaivenes de la economía estadounidense y, en cualquier caso, el problema social se mantuvo como el principal desafío de México de cara al futuro.

## El mundo externo

El modelo de los liberales decimonónicos fueron las potencias europeas y, sobre todo, el exitoso vecino del norte y primera nueva nación de la época: Estados Unidos. Casos extremos, pero no únicos, de admiración mexicana por el liberalismo estadounidense, fueron Lorenzo de Zavala —un dinámico político liberal yucateco que terminó como vicepresidente de la Texas independiente— y Miguel Lerdo de Tejada, que vieron muy pocos méritos, si es que alguno, en la herencia hispana. La derrota de México en el 47 frente a Estados Unidos no volvió antiyanquis a los liberales, sino todo lo contrario: les confirmó la superioridad del modelo liberal estadounidense sobre el híbrido y desordenado que entonces dominaba en México. A un grupo particularmente radical y minoritario, la idea de que México desapareciera como país independiente y fuera absorbido por Estados Unidos, no le pareció mala. Esa anexión eliminaría a un ejército inservible pero consumidor de recursos, a la Iglesia católica dominante en México la neutralizaría la pluralidad de Iglesias existentes en Estados Unidos, la composición étnica mexicana se vería favorecida por un flujo de inmigrantes de origen europeo y, finalmente, la fuerza de las instituciones liberales y democráticas estadounidenses se impondría sobre el desorden político, económico y administrativo existente en México.<sup>49</sup>

Cuando el liberalismo revolucionario del siglo xix se convirtió en gobierno y en régimen tras la restauración de la república, sus dirigentes consideraron que el mundo externo tendría que ser uno de los detonadores del desarrollo mexicano. El capital internacional, que entonces fluía de Europa y en menor medida de Estados Unidos (que aún era importador neto de capital), podría construir los ferrocarriles, reactivar las minas, modernizar la actividad textil, revivir y diversificar la agricultura y el comercio exterior y dar forma a un sistema bancario que hasta ese momento, de tan débil, era casi inexistente. Al inicio, el tiempo corrió lento pero finalmente Porfirio

Díaz creó las condiciones para que llegara ese capital y esa tecnología. Hacia 1910 la inversión estadounidense en México se calculó en 646 millones de dólares y la europea —básicamente británica y francesa pero con participación de otros países— en poco más de 1,600 millones de dólares. Ése era el corazón de la economía moderna del México de entonces y lo que le ligaba con el sistema económico internacional.<sup>50</sup>

Para los neoliberales de fines del siglo xx, el modelo siguió siendo el mismo de sus antecesores: el estadounidense. Para adecuarse a las exigencias y oportunidades de la política económica internacional, el nacionalismo revolucionario perdió fuerza en el discurso y casi desapareció en la práctica, por considerársele obsoleto, y en 1994 se le sustituyó por el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (TLCAN). Ese acuerdo, que buscaba unir a la economía subdesarrollada de México con la enorme, pujante e innovadora de Estados Unidos y con la canadiense, fue iniciativa mexicana. La negociación se inició a mediados de 1990 y sólo hasta 1993 se logró concretar un acuerdo, tras vencer una seria resistencia de los sindicatos y otros intereses proteccionistas en Estados Unidos. El TLCAN fue considerado como la gran victoria del gobierno de Carlos Salinas porque, según se argumentó, se había adelantado al resto de América Latina en el juego de la construcción de bloques económicos y puso a México en el centro de la globalización. Hacia el final del siglo xx, las importaciones y exportaciones mexicanas sobrepasaban los doscientos mil millones de dólares anuales. Puesto que 80% de ese comercio estaba concentrado en Estados Unidos, en un esfuerzo por crear un mínimo de contrapesos, el gobierno mexicano firmó una serie de tratados de libre comercio con otros países y áreas económicas, siendo el principal el suscrito el año 2000 con la Unión Europea seguido por otros con países latinoamericanos.

Al igual que en el liberalismo original, en el neoliberalismo se le asignó un papel central a la inversión extranjera tanto como fuente de capital y tecnología como de medio

para penetrar los mercados externos. Las exportaciones directamente ligadas a las grandes empresas internacionales y la maquila se convirtieron en una parte importante del total. En suma, al finalizar el siglo xx y como resultado del proyecto de los nuevos liberales, el dinamismo del crecimiento económico mexicano era ya el mercado externo y no el interno, y la economía mexicana se integraba de manera creciente a la estadounidense. Así, en los dos casos, aunque quizá más en el segundo que en el primero, el nacionalismo original se vio derrotado por la lógica del proyecto económico.

El tema migratorio entre México y el resto del mundo no fue significativo en el liberalismo original excepto en el nivel teórico, como un proyecto para traer inmigrantes europeos a fin de “blanquear” a la sociedad y solucionar así, de una vez por todas, el problema indígena. En contraste, en el siglo xx lo importante no fue, para nada, la inmigración, sino la emigración, es decir, la expulsión masiva de mano de obra hacia el país vecino del norte. Formalmente, y a diferencia de la Unión Europea, en el TLCAN, el libre flujo entre México y sus vecinos anglosajones del norte debía ser de mercancías y capitales pero no de mano de obra. En la realidad, y aunque Estados Unidos adoptó una política de restricción a la migración legal y de gran oposición a la ilegal, el hecho fue que al finalizar este siglo, en Estados Unidos se encontraban más de ocho millones de mexicanos y la corriente de trabajadores sin documentos seguía aumentando a razón de ciento cincuenta mil a trescientos mil al año.<sup>51</sup> En efecto, a pesar de los esfuerzos de los legisladores estadounidenses por castigar la contratación de trabajadores indocumentados y de las acciones de la Patrulla Fronteriza por capturarlos y repatriarlos, abundaron los patrones estadounidenses dispuestos a contratar mano de obra extranjera sin documentos apropiados pero barata, como era la mexicana.<sup>52</sup> Hacia principios del siglo xxi, uno de los grandes esfuerzos del gobierno mexicano ha sido la negociación de un nuevo tratado sobre trabajadores mexicanos en Estados Unidos, posición que

apoyaban algunos sectores estadounidenses necesitados de manos de obra barata. Así, a contrapelo de la legalidad pero en total concordancia con las leyes del mercado, la integración mexicana a la economía estadounidense en el segundo liberalismo, terminó por comprender a todos los factores de la producción y todo tipo de productos, incluyendo, desafortunadamente, las drogas prohibidas.

### Estado, mercado y sociedad

Entre los liberales decimonónicos —Mora es un ejemplo—, existía la idea de que la clase propietaria era la que tenía los mejores elementos de juicio sobre la cosa pública y, por tanto, era la que debería dominar a la hora de decidir sobre los asuntos políticos.<sup>53</sup> Desdichadamente para esos liberales, el derecho al sufragio no se pudo restringir legalmente, de tal forma que sólo unos pocos lo pudieran ejercer. Sin embargo, las elecciones indirectas junto con la manipulación y el fraude terminaron por ser un buen conjunto de instrumentos para mantener el control de los procesos políticos en manos de unos cuantos, y la política de los pocos terminó por redundar en beneficio económico para ellos, por lo que el México liberal fue, también, un México oligárquico.

El país en el que se formaron y desarrollaron los liberales del siglo XIX era uno fundamentalmente rural, de ahí el empeño en poner en el mercado las grandes propiedades agrícolas de la Iglesia católica —y de paso, las urbanas— y destruir la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Sin embargo, no era su proyecto simplemente privatizar la propiedad y favorecer aún más a la gran hacienda —a ésta la consideraban poco eficiente—, sino fomentar la pequeña y mediana propiedad como la mejor forma de hacer auténticos ciudadanos.<sup>54</sup> Es verdad que los escritos de esos liberales se encuentran poblados de referencias a la industria como ideal, pero en la práctica fue en la agricultura donde estaban las

posibilidades inmediatas y el problema central de la modernidad mexicana. Al final de cuentas, y en el mejor de los casos, el mundo de rancheros o *farmers* al que aspiraban los ideólogos liberales, se dio a medias, y la gran propiedad, el latifundio, fue lo que terminó por dominar el campo del México liberal.

En la teoría del neoliberalismo del siglo XX, y tras la experiencia de un sector público omnipresente, la privatización fue uno de los puntales de la política: devolver al mercado y a la iniciativa individual el grueso de la actividad económica para favorecer que el Estado se concentrara en su papel de conductor y no disipara su energía como productor. En el discurso neoliberal se subrayó una y otra vez que el objetivo debería ser dar forma a un “Estado fuerte” en contraposición al “Estado obeso” del pasado. Por otro lado, el mercado que se dijo buscar no era el de la gran empresa monopólica sino la mediana e incluso la pequeña, por ser ésta la gran empleadora de mano de obra, lo mismo en la agricultura que en la industria, el comercio y los servicios. Sin embargo, en la práctica del neoliberalismo se volvió a repetir el fenómeno del liberalismo original, pues fueron las grandes concentraciones de capital las que recibieron el mayor apoyo oficial, que se justificó con el argumento de que eran las únicas capaces de dominar el arte de la globalización y la competencia en el darwiniano mercado internacional. Por tanto, grupos gigantes extranjeros, como las empresas automotrices, o nacionales como la banca CARSO, CEMEX o VITRO o por mencionar sólo algunas, fueron los que desde el inicio contaron con el apoyo del Estado, y lo mantuvieron incluso después de que algunos de ellos cometieron errores o actos de corrupción muy graves, como fue el caso de los constructores de carreteras de cuota o los bancos, a los que el gobierno rescató de la quiebra a la que les condenaba el mercado con un costo enorme para el erario.<sup>55</sup>

Las prácticas tanto del primero como del segundo liberalismo mexicanos no contribuyeron a resolver o al menos a disminuir uno de los problemas centrales de la sociedad

mexicana: el de la desigualdad, sino que lo agudizaron. La concentración de la propiedad rural en el México decimonónico queda sintetizada con estas cifras: las cuatro quintas partes de todas las comunidades rurales mexicanas, es decir, la mitad de la población rural de un país fundamentalmente rural, se encontraban dentro de los latifundios privados.<sup>56</sup> La concentración del ingreso en el México de fines del siglo xx se puede resumir así: en 1996, 10% de los hogares mexicanos recibían 43% del ingreso, en tanto que el 10% más pobre se las tuvo que arreglar con apenas 1% del ingreso disponible para los hogares.<sup>57</sup>

### La legalidad

En principio, el respeto a la ley, la preservación del "Estado de derecho", fue una de las banderas de los liberales en su época de lucha a muerte con los conservadores. La defensa de la Constitución de 1857 justificó el derramamiento de sangre y la destrucción a lo largo de los doce años que siguieron. Una y otra vez el presidente Juárez sostuvo que el apego a la norma jurídica estaba por sobre cualquier otra consideración. Sin embargo, destruido el adversario y asentado el gobierno republicano en manos de los liberales, el apego de los vencedores al marco jurídico fue muy relativo. Tras la consolidación del triunfo militar de Porfirio Díaz, el espíritu y la letra misma de la Constitución se hicieron a un lado para permitir la construcción de una prolongada dictadura personal, donde el "Estado de derecho" resultó un concepto vacío de contenido.

En el discurso, los nuevos liberales —como sus antecesores— una y otra vez refrendaron su compromiso con la vigencia del "Estado de derecho", pero en la práctica, y notablemente en el gobierno de Carlos Salinas, acentuaron la "dictadura presidencial", propia del régimen posrevolucionario —y que en esencia no era muy distinta de la de Porfirio Díaz, salvo que no estaba ligada a la persona sino al cargo—, lo

que acentuó aún más la naturaleza autoritaria del régimen. La violencia al marco legal quedó ejemplificada con fraudes electorales, como el de Chihuahua en 1986, y, sobre todo, el nacional de 1988. Fue precisamente la maximización del uso autoritario del poder estatal lo que permitió al presidente Salinas y a su círculo tecnocrático, impulsar, imponer y sostener sus reformas económicas de una manera más rápida y profunda que en cualquier otro país latinoamericano, con excepción de la dictadura militar de Chile.

### El problema indígena

Los liberales originales nunca pudieron resolver, ni en la teoría ni en la práctica, el principal problema social: el "problema del indio". El gran ideólogo del liberalismo, José María Luis Mora, simplemente consideró que la masa indígena no podía servir como base de la nacionalidad mexicana.<sup>58</sup> Para Mora y los que razonaban como él, la posible solución al "problema" consistía en hacer desaparecer al indio mediante políticas de exterminio —nómadas y rebeldes—, de aculturación o de mezcla racial y transformando a fuerza la propiedad comunal en pequeña propiedad individual. En la práctica, el liberalismo original simplemente no pudo diseñar una política no violenta para enfrentar el tema indígena, como tampoco se propuso hacer algo efectivo para resolver la cuestión de la pobreza en general, aunque sí se mostró activo en promulgar todo tipo de leyes contra la vagancia.<sup>59</sup>

Cuando el nuevo liberalismo se apoderó del centro del escenario al finalizar el siglo xx, el tema indígena, si bien no estaba resuelto, parecía ser algo muy secundario, pues las cifras oficiales ponían apenas a 10% de la población como indígena. En realidad, los herederos funcionales de la gran masa indígena del siglo xix resultaron ser en el xx los pobres y los marginados, aunque fue en los remanentes de las culturas y formas de vida indígenas donde se agudizó de manera



terrible el problema de la pobreza, la marginación y la discriminación; no en balde Chiapas, Oaxaca y Guerrero resultaron ser los estados con mayor población indígena, los cuales se encontraban entre los de mayores índices de marginalidad.<sup>60</sup>

Oficialmente, el México de fines del siglo xx era ya un país mestizo, lo que se presentaba como uno de los logros de la Revolución Mexicana y de su política indigenista, encaminada precisamente a integrar a las etnias, asimilarlas en el gran todo nacional por la vía del reparto agrario, la educación y la salud públicas, así como por el resto del conjunto de políticas públicas dedicadas al combate a la pobreza. Se trataba, en realidad, de la misma meta política del siglo anterior: lograr que la cultura indígena desapareciera en algún futuro no muy lejano pero sin violencia y en aras de la homogeneidad nacional. Se buscaba disolver lo indígena con base en la modernidad.<sup>61</sup> Aun con todo lo anterior, el problema de los indios persistió aunque ya no fue reconocido como importante por las autoridades ni por la opinión pública en general, sino hasta el momento en que un grupo de indígenas forzaron de nuevo la puesta del tema en el centro del debate nacional mediante el espectacular levantamiento armado de las cañadas de Chiapas el 1 de enero de 1994 y la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La rebelión chiapaneca no representó nunca una seria amenaza militar al gobierno o al régimen, pero sí un enorme problema político por la legitimidad de la demanda: resarcir la injusticia histórica y respetar la cultura indígena, preservándola mediante el otorgamiento de la autonomía jurídica a sus comunidades.<sup>62</sup> En febrero de 2001, gracias a las nuevas condiciones propiciadas por la desaparición del régimen autoritario por la vía del triunfo de Vicente Fox y el PAN el 2 de julio del año anterior, la comandancia del EZLN inició una marcha hacia la ciudad de México que no fue otra cosa que una enorme movilización en favor de las demandas indígenas. Tras una dramática votación en el Congreso, la mayoría de los diputados se sobrepuso a la oposición del PAN y al sector más

derechista del PRI y aceptó recibir en la gran tribuna a los representantes indígenas del EZLN y del Congreso Nacional Indígena y escuchar y considerar sus argumentos en favor de un cambio sustantivo en el marco jurídico y en la conciencia colectiva en relación con el tema indígena. Sin embargo, el resultado final de todo el proceso fue anticlimático, pues las facciones del PAN, PRI y PRD en el Senado desecharon las razones de los rebeldes indígenas y votaron unas modificaciones al texto presentado por el Ejecutivo —el de la “ley Cocopa”— que resultaron inaceptables para el EZLN y para el Congreso Nacional Indígena (CNI). En la Cámara de Diputados, la propuesta de los senadores pasó por mayoría, aunque esta vez con la oposición del PRD y, finalmente, las legislaturas de los estados —excepto algunas con gran peso indígena como las de Oaxaca o Chiapas— se sumaron a la decisión de reformar la Constitución en materia indígena, en el sentido deseado por el PAN y el PRI y sin importarles la oposición del EZLN y del CNI. El resultado fue el estancamiento de la paz en Chiapas y la prolongación del “problema indígena”.

### Otros temas y una conclusión

El federalismo fue, por principio, un concepto íntimamente ligado a la causa liberal. En el inicio del liberalismo original, la relación entre las regiones y el centro resultó un asunto fundamental, pues las fuerzas centrífugas tomaron la iniciativa, al punto de convertirse en el corazón de la política mexicana y en una amenaza real a la integridad de la nueva nación. Y el asunto se volvió a presentar con la Revolución Mexicana, en particular la lucha contra los jefes políticos y en favor del municipio libre. En la teoría el federalismo se impuso pero en la realidad triunfó un centralismo feroz tanto en el Porfiriato como en la posrevolución. En teoría, el segundo liberalismo se sublevó en contra de esa centralización debido a la ineficiente asignación de los recursos públicos y contraria a la

flexibilidad administrativa que requería el mercado. Sin embargo, y aunque los neoliberales hicieron del proceso de descentralización la esencia de un supuesto nuevo federalismo, la necesidad de mantener concentrado el poder de decisión en la presidencia para llevar adelante la reforma económica, hizo que la descentralización neoliberal fuera contradictoria en extremo y se quedara más en el plano de la teoría que de la realidad. La verdadera descentralización empezó cuando el PRI fue derrotado y expulsado de la presidencia al final del siglo.

La conflictiva relación entre la Iglesia católica y los liberales fue un asunto central en todo el caótico y violento proceso político del siglo XIX. La Guerra de Reforma y el triunfo de Juárez sobre el Segundo Imperio, concluyeron con una exclusión casi total de toda religión organizada de la arena política. En abierto contraste, el nuevo liberalismo decidió no mantener esa exclusión sino invitar a las Iglesias a formar parte activa y formal de una nueva coalición política que impulsara las reformas neoliberales. Para lograr lo anterior, el presidente Salinas se propuso modificar radicalmente el marco constitucional y legitimar la reintroducción de las Iglesias —en particular a la católica—, en el campo de la política para que, en la práctica, esto reforzara la legitimidad del proyecto de cambio económico. Así pues, mientras los liberales originales tuvieron que enfrentarse violentamente con la Iglesia católica por ser una gran corporación conservadora que amenazaba al Estado mismo y por haberse declarado el Vaticano como enemigo del liberalismo, los nuevos liberales diseñaron una política para revitalizar a la antigua enemiga hasta convertirla de nuevo en un actor político que le sirviera para neutralizar las amenazas de la democracia, sobre todo si éstas venían de la izquierda nacionalista y con pocas simpatías por la visión neoliberal del proceso económico. Y la lista de temas susceptibles de comparación entre los liberalismos de los siglos XIX y XX puede ampliarse a la lucha contra el déficit fiscal y la ampliación de la base gravable, la transformación del sistema educativo y otros temas que, de

abordarse, obligarían a hacer de este breve ensayo un trabajo mayor pero fuera de lugar.

## Conclusión

Una vez en el poder, el liberalismo mexicano original fue abandonando sus compromisos con la democracia y con el Estado de derecho en favor de los económicos, hasta terminar en un sistema oligárquico enmarcado por la larga dictadura personal de Porfirio Díaz. La dificultad —imposibilidad— de institucionalizar esa dictadura personal llevó a que la oposición recurriera, en 1910, a la rebelión como única forma de romper el cerrado círculo del poder oligárquico. Esa rebelión, que en principio sólo se proponía restaurar los valores democráticos del liberalismo original, se topó con una violenta reacción conservadora y todo el proceso devino en revolución social.

El segundo liberalismo se convirtió, en 1988, en una especie de fase superior, y última, del autoritarismo mexicano, en su tumba. En efecto, la reforma del modelo económico de los años ochenta aceleró de tal manera las contradicciones políticas y sociales del régimen en que con sorprendente rapidez surgió el neoliberalismo, que se desarrolló una reacción que dio forma a dos grandes fuerzas partidistas de oposición —PRD y PAN—, a un levantamiento armado en Chiapas y, finalmente, a una “rebelión electoral” ciudadana que, tras varios intentos fallidos, logró, pacíficamente en las elecciones del 2 de julio de 2000, poner fin a un monopolio de 71 años de un partido de Estado: el del PRI.

El primer liberalismo, tras evolucionar y consolidarse como dictadura, concluyó cuando una revolución triunfante propuso una solución alternativa —estatista— a los problemas nacionales. El liberalismo de finales del siglo XX, como resultado de la madurez de la sociedad mexicana y de circunstancias externas favorables, terminó, sin proponérselo y resistiendo hasta el final, por crear condiciones tales que la

clase política en el poder ante la falta de alternativa se vio obligada a reconocer, en julio de 2000, su derrota electoral. La alternancia de partidos fue, también, un cambio de régimen. La democracia que se inició a fines del siglo xx, y precisamente por estar encabezada por un partido y una corriente de centro-derecha, no se propuso cambiar el modelo económico de mercado creado ya por el neoliberalismo autoritario, sino al contrario, mantenerlo, aunque dándole una base de estabilidad mediante la generación de legitimidad como resultado de un cambio en las reglas centrales del juego político. La democracia incipiente que empezó a operar en México en el momento en que el siglo xx se extinguió, le dio al neoliberalismo mexicano el tono de modernidad que le faltaba. Así, al perder el poder el PRI y los liberales autoritarios, otros liberales, con una legitimidad democrática sin precedente histórico, se hicieron cargo del país. El nuevo régimen que nació precisamente al inicio del siglo xxi tenía en su favor la energía generada por el cambio, pero también heredó el desafío de todos los liberalismos: resolver el viejo y persistente problema social. En el siglo que apenas se inicia, la tarea política mexicana se centraba en tres temas y metas: la consolidación de una democracia política liberal a pesar de la falta de tradición al respecto, la creación de un Estado de derecho y la necesidad de dar respuesta a la persistente, centenaria, exigencia de justicia social. El éxito del nuevo régimen no estaba asegurado de antemano, pero era posible y, sobre todo, valía la pena intentar marchar por el camino que debía desembocar en un liberalismo no autoritario y responsable ante las demandas de dar forma y vida a algo buscado desde el inicio de la vida nacional pero aún no encontrado: una institucionalidad donde fuera posible la legalidad y la solidaridad efectiva.

## Notas

- El Colegio de México.
- <sup>1</sup> Eric Hobsbawm, *The age of extremes. A history of the world, 1914-1991*, Nueva York, Vintage Books, 1996, pp. 404 y ss.
- <sup>2</sup> La lógica de la concentración de los beneficios en el sistema económico mundial de finales del siglo xx se encuentra sintetizada en Vivianne Forrester, *Una extraña dictadura*, México, FCE, 2000.
- <sup>3</sup> Las cifras sobre pobreza se encuentran en Enrique Hernández Laos, *Crecimiento económico y pobreza en México*, México, UNAM, 1992.
- <sup>4</sup> Un análisis de los efectos de la crisis de los años ochenta y la nueva caída de la economía en 1995, se encuentra en Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, *Pobreza y distribución del ingreso en México*, México, FCE, 1999.
- <sup>5</sup> Al hacer una síntesis y una evaluación del sexenio de Miguel de la Madrid, la Unidad de la Crónica Presidencial —la oficina encargada de dar la visión oficial de la historia del sexenio—, dividió la tarea del periodo en 25 renglones donde se incluyeron desde la corrección de las finanzas públicas y los procesos electorales hasta el fútbol, pero nada se dijo en relación con la democratización; ese tema simplemente no existió. Véase Presidencia de la República, *Las razones y las obras. Gobierno de Miguel de la Madrid. Crónica del sexenio 1982-1988. Sexto año*, México, FCE, 1988, pp. 16-162.
- <sup>6</sup> Sobre la naturaleza y principales características de la política exterior mexicana anterior a la crisis de 1982, véase Mario Ojeda, *Alcances y límites de la política exterior de México*, México, El Colegio de México, 1976.
- <sup>7</sup> Una visión general de la evolución política mexicana en la época del cambio económico, se puede encontrar en Lorenzo Meyer, *Liberalismo autoritario*, México, Océano, 1995 y también en ídem, *Cambio de régimen y democracia incipiente*, México, Océano, 1998.
- <sup>8</sup> Para una visión sumaria del nacionalismo revolucionario, véase la segunda parte del libro de Josefina Vázquez y Lorenzo Meyer, *México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico, (1776-1988)*, México, FCE, 1994; para un ejercicio similar en relación con la naturaleza y cambio de las políticas sociales del Estado mexicano de los años setenta a los noventa del siglo xx, véase María del Carmen Pardo, *La administración de la política social: cuatro estudios. El diseño administrativo de programas de emergencia*, Tesis doctoral, México, Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana, 1998.
- <sup>9</sup> Véase, sobre la naturaleza de la democratización mundial a partir de 1973, a Samuel P. Huntington, *La tercera ola: la democratización a fines del siglo veinte*, México, Paidós, 1994.
- <sup>10</sup> Jesús Reyes Heróles, *El liberalismo mexicano, Los orígenes*, t. I, 2ª. ed., México, FCE, 1974.

<sup>11</sup> Para un análisis del origen del proyecto de crecimiento industrial protegido, véase Blanca Torres, *Historia de la Revolución Mexicana. Hacia la utopía industrial*, t. 21, México, El Colegio de México, 1984, pp.15-154.

<sup>12</sup> El éxito de este modelo entre las elites empresariales y políticas, quedó bien captado en la obra de Frank Brandenburg, *The making of modern Mexico*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1964.

<sup>13</sup> Víctor L. Urquidi, "El gran desafío del siglo XXI: el desarrollo sustentable. Alcances y riesgos para México", en: *El Mercado de Valores*, diciembre de 1999, p. 51.

<sup>14</sup> Una descripción sucinta y justa del modelo mexicano de sustitución de importaciones en su momento de esplendor se puede encontrar en Clark W. Reynolds, *La economía mexicana. Su estructura y crecimiento en el siglo XX*, México, FCE, 1973.

<sup>15</sup> Un análisis de la gestación y estallido de la crisis económica de 1982 se encuentra en Enrique Cárdenas, *La política económica en México, 1950-1994*, México, FCE, 1996, pp. 86-152 y en René Villareal, *Industrialización, deuda y desequilibrio externo en México. Un enfoque neoestructuralista (1929-1997)*, México, FCE, 1997, pp. 391-453.

<sup>16</sup> Una síntesis de los cambios en la economía mexicana a partir de mediados de los ochenta se encuentra en Cárdenas..., *La política económica, op. cit.*, pp. 153-190 y Nora Lustig, *Mexico, the remaking of an economy*, Washington, Brookings Institution Press, 1998, pp. 28-213. Para una síntesis de la naturaleza del sistema político de ese mismo periodo, se puede ver, entre otros trabajos, el de Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer, *A la sombra de la Revolución Mexicana*, México, Cal y Arena, 1989, y Susan Kaufman Purcell, *The Mexican profit-sharing decision. Politics in an authoritarian regime*, Berkeley, University of California Press, 1975.

<sup>17</sup> Soledad Loaeza, "Liberalización política e incertidumbre en México", en María Lorena Cook, Kevin J. Middlebrook y Juan Molinar Horcasitas (eds.), *Las dimensiones políticas de la reestructuración económica*, México, Cal y Arena, 1996, pp. 171-194.

<sup>18</sup> Benedict Anderson, *Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo*, México, FCE, 1993.

<sup>19</sup> Vázquez y Meyer, *México frente a Estados Unidos...*, op. cit., pp. 66-67.

<sup>20</sup> Josefina Vázquez, *México y el mundo. Historia de sus relaciones exteriores*, t. 1, México, Senado de la República, 1990, p. 150.

<sup>21</sup> Fernando Escalante, *Ciudadanos imaginarios*, México, El Colegio de México, 1992.

<sup>22</sup> Para una caracterización política del Porfiriato, véase François-Xavier Guerra, *México: del antiguo régimen a la revolución*, t. I, México, FCE, 1988. La naturaleza del proceso electoral en el Juarismo y en el Porfiriato ha sido analizada por Luis Medina, en José Varela Ortega y Luis Medina Peña, *Elecciones, alternancia y democracia. España-México, una reflexión comparativa*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000, pp. 217-226.

<sup>23</sup> Véase al respecto la parte final de la interpretación que Sierra hizo del proceso mexicano en Justo Sierra, *Evolución política del pueblo mexicano*, México, CNCA, 1993. (1ª ed., 1900-1902).

<sup>24</sup> Lustig, *Mexico, the remaking...*, pp. 117-122.

<sup>25</sup> Véanse sobre el particular los trabajos contenidos en Esthela Gutiérrez Garza (coord. gral.) y Juan Manuel Ramírez y Jorge Regalado (coords.), *El debate nacional, Los actores sociales*, t. IV, México, Diana, 1997.

<sup>26</sup> Charles A. Hale, *El liberalismo mexicano en la época de Mora*, México, Siglo XXI, 1972, pp. 42-73.

<sup>27</sup> Ángel Pola (comp.), *Benito Juárez. Discursos y manifiestos*, t. II, México, INEHRM, 2000, p. 211.

<sup>28</sup> Luis González y González, *Obras completas. El siglo de las luchas*, t. IV, México, Clio, 1996, p. 68.

<sup>29</sup> *Ibid.*, pp. 68-69.

<sup>30</sup> Hale, *El liberalismo mexicano...*, pp.123-151.

<sup>31</sup> Reyes Heróles, *El liberalismo mexicano. Los orígenes*, t. 2, pp. 89-136.

<sup>32</sup> Un excelente ejemplo de las fuentes actuales del pensamiento neoliberal es la obra de Milton Friedman, en particular, *Capitalism and freedom*, Chicago, The University of Chicago Press, 1962. Una visión triunfante de las razones del éxito del capitalismo occidental sobre el socialismo soviético se puede encontrar en Francis Fukuyama, *El fin de la historia y el último hombre*, México, Planeta, 1992.

<sup>33</sup> Véase al respecto el *Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988*, elaborado al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid.

<sup>34</sup> Charles C. Cumberland, *Mexican Revolution. The constitutionalist years*, Austin, The University of Texas Press, 1972, pp. 351-355.

<sup>35</sup> Raymond Vernon, *The dilemma of Mexico's development. The roles of the private and public sectors*, Cambridge, Harvard University Press, 1963, pp. 72-87.

<sup>36</sup> Cifras tomadas de Gabriel Zaid, *La economía presidencial*, México, Vuelta, 1987, p. 25.

<sup>37</sup> México, Presidencia de la República, *Las razones y las obras...*, Cuarto año, pp. 514-528.

<sup>38</sup> Roberto Newell G. y Luis Rubio F., *Mexico's dilemma. The political origins of the economic crisis*, Boulder, Westview Press, 1984, pp. 260 y ss.

<sup>39</sup> Un buen resumen de todos los cargos en contra de la política económica del gobierno mexicano en este periodo se encuentra en la obra citada de Zaid y en su continuación: Gabriel Zaid, *La nueva economía presidencial*, México, Grijalbo, 1994.

<sup>40</sup> Esta lucha dentro del partido de Estado y la división a la que condujo, es el centro del trabajo de Luis Javier Garrido, *La ruptura. La corriente democrática del PRI*, México, Grijalbo, 1993.

<sup>41</sup> Sobre la naturaleza de la relación entre el PAN y los empresarios neopanistas a partir de la crisis de 1982, véase el capítulo quinto de Soledad Loaeza, *El*

*Partido Acción Nacional: la larga marcha. Oposición leal y partido de protesta, 1939-1994*, México, FCE, 1999, pp. 347-398.

<sup>42</sup> Enrique Nanti, *El Maquío Clouthier. La biografía*, México, Planeta, 1998, pp. 141-192.

<sup>43</sup> Al respecto, véase Juan Molinar Horcasitas y Jeffrey Weldon, "Elecciones de 1988 en México: crisis del autoritarismo", *Revista Mexicana de Sociología*, vol. LII, núm. 4, octubre-diciembre de 1990, pp. 229-262.

<sup>44</sup> Antonio Escobar Ohmstede, "La política agraria y los grupos indígenas, 1856-1857", en: *Papeles de la Casa Chata*, año 5, núm. 7, 1990, p. 4.

<sup>45</sup> Salinas hizo una exposición de su concepto de "liberalismo social" en una reunión para celebrar el LXIII aniversario del PRI, el 4 de marzo de 1992, México, Presidencia de la República, *Crónica del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Cuarto año*, México, FCE, 1994, pp. 99-101.

<sup>46</sup> Denise Dresser, *Neopopulist solutions to neoliberal problems. Mexico's National Solidarity Program*, Current Issues Brief, núm. 4, Center for us-Mexican Studies, La Jolla, Universidad de California, San Diego, 1991.

<sup>47</sup> Una visión panorámica del problema de la pobreza y la polarización social en el último decenio del siglo xx, se tiene en Esthela Gutiérrez Garza (coord. gral.), *La política social*, t. V, México, Diana, 1995.

<sup>48</sup> Boltvinik y Hernández, *Pobreza...*, p. 22. Para un examen histórico de la evolución de la pobreza como elemento central del debate nacional, véase a Julieta Campos, *¿Qué hacemos con los pobres? La reiterada querrela por la nación*, México, Aguilar, 1995.

<sup>49</sup> Hale, *El liberalismo mexicano...*, pp. 193-200.

<sup>50</sup> Vázquez y Meyer, *México frente a Estados Unidos...*, pp. 114-117.

<sup>51</sup> *La situación demográfica de México, 1999*, México, CONAPO, 1999, p. 45.

<sup>52</sup> Sobre la migración de mexicanos a Estados Unidos al final del siglo xx hay una bibliografía muy extensa. Entre otros trabajos, se pueden consultar los de especialistas como Jorge Bustamante en México y Wayne Cornelius y Manuel García y Griego en Estados Unidos.

<sup>53</sup> José María Luis Mora, *Obras sueltas de José María Luis Mora. Ciudadano Mexicano*, México, Porrúa, 1963, p. 64.

<sup>54</sup> Silvestre Villegas Revueltas, *El liberalismo moderado en México, 1852-1864*, México, UNAM, 1997, p. 135.

<sup>55</sup> La crisis de 1995 llevó a la quiebra a muchos de los deudores de los bancos y puso a los bancos mismos al borde de la bancarrota. El gobierno no dejó operar en ese caso las famosas "leyes del mercado" y mediante la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), rescató el sistema bancario, pero a un costo de ochenta mil millones de dólares que se convirtieron en deuda pública.

<sup>56</sup> Alan Knight, *The Mexican Revolution*, vol. I, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, p. 96.

<sup>57</sup> *La situación demográfica de México...*, p. 153.

<sup>58</sup> José María Luis Mora, *México y sus revoluciones*, t. I, México, Porrúa, 1986, pp. 65-74.

<sup>59</sup> Luis González y González, *El indio en la era liberal*, México, Clío, 1996; Romana Falcón, *Las naciones de una república. La cuestión indígena en las leyes y el congreso mexicanos, 1867-1876*, México, Enciclopedia Parlamentaria, Congreso de la Unión, 1999.

<sup>60</sup> *La situación demográfica de México...*, p. 58.

<sup>61</sup> Una discusión y crítica radical de esta política, de sus premisas, objetivos y logros, se encuentra en Guillermo Bonfil, *México profundo. Una civilización negada*, México, Grijalbo, 1989.

<sup>62</sup> Héctor Díaz-Polanco, *La rebelión zapatista y la autonomía*, México, Siglo XXI, 1997.